

## *Fraude, violencia y negociaciones en Kenia*

La presión internacional y los esfuerzos diplomáticos realizados por el Ex-Secretario General de la ONU, Kofi Annan, durante las últimas semanas en Kenia están consiguiendo promover el consenso en torno a los puntos básicos de un preacuerdo entre el presidente, Mwai Kibaki, y el líder opositor, Raila Odinga. Este preacuerdo puede establecer las bases para poner fin a la violencia que sufre el país desde el anuncio de los polémicos resultados de las elecciones legislativas y presidenciales del 27 de diciembre de 2007, que ya han causado más de 1.000 víctimas mortales y el desplazamiento forzado de unas 300.000 personas. Estos resultados renovaron el mandato del presidente y no han sido aceptados por la oposición ni aprobados por los observadores internacionales, a causa del fraude y las diversas irregularidades cometidas. El apoyo de la iglesia, de los sectores económicos del país y de la comunidad internacional han contribuido a la consecución de estos preacuerdos. Incluso la administración Bush está intentando poner su grano de arena y ha enviado a la secretaria de Estado Condoleezza Rice a apoyar la mediación de Kofi Annan. Esta intervención de Bush sólo tiene el objetivo de mejorar su imagen belicista en el ocaso de su mandato, plagado de fracasos en el ámbito interno e internacional.

Durante las próximas semanas las partes tendrán que alcanzar nuevos compromisos reales sobre cómo implementar los cuatro puntos básicos que conforman la agenda del plan de paz: poner fin a la situación de violencia, atajar la situación humanitaria derivada de los acontecimientos, resolver la crisis política y, finalmente, afrontar las injusticias históricas y las disputas por la propiedad de la tierra. De momento, las partes ya han acordado diversas acciones para poner fin a la violencia, que incluyen la desmovilización de las milicias y el control de los discursos provocadores que incitaban el odio entre los dos sectores, aunque se tiene que ver todavía la implementación de estas medidas. En este sentido, Kofi Annan ha propuesto el establecimiento de una comisión de verdad y reconciliación. Con respecto a la crisis política, las partes también han aproximado posturas acordando la creación de un panel independiente que se encargará de investigar los acontecimientos que tuvieron lugar durante los comicios, y también han alcanzado un preacuerdo sobre una reforma de la Constitución, del tribunal electoral, de la policía y del Parlamento. Esta comisión independiente estará formada por personalidades kenianas y extranjeras, empezará a trabajar como a muy tarde el próximo 15 de marzo y dispondrá entre tres y seis meses por determinar si se produjeron irregularidades. No obstante, las dos partes todavía están mucho alejadas con respecto a la crisis política y la búsqueda de una solución que podría orientarse hacia un reparto del poder político y la formación de un gobierno de unidad, aunque se debate también entorno la creación de la figura de un primer ministro. Annan ha destacado que las partes tienen que formar una amplia coalición para acordar la reforma electoral y constitucional. En el país han continuado los enfrentamientos y los actos de violencia, lo cual pone de manifiesto las dificultades existentes para controlar la situación, y quizás también la falta de voluntad para hacerlo.

En las raíces de la situación actual convergen diversas cuestiones. La política y la economía de Kenia han sido dominadas desde su independencia en 1963 por el partido Kenia African National Union (KANU), controlado por la comunidad más numerosa del país, los kikuyus (o gikuyus), en detrimento del resto. El KANU fue encabezado por el líder de la independencia, Jomo Kenyatta, que pasó de un nacionalismo radical a una política más burguesa y clientelar de promoción de las élites de los kikuyus (22% de la población), los embus y los merus (estas dos últimas con menos del 5% de la población). A su muerte el año 1978, el poder político y la riqueza del país se concentraban en una alianza que agrupaba las tres comunidades. Hay que recordar que el país está formado por 48 comunidades, a pesar de que tres de las cuales - kikuyu, luo y luhya - representan el 65% de la población, por lo cual los acuerdos de poder se han tenido que ir configurando, en mayor o menor medida, en equilibrios y marginaciones entre estos grupos. La subida al poder del autoritario y cleptócrata Daniel Arap Moi en 1978, proveniente de la minoría kalenjin (12%), significó la marginación progresiva del poder de las élites tradicionales kikuyus en favor de su propia minoría, y en el 2002 las élites kikuyus buscaron el apoyo del resto de la oposición política para recuperarlo. Arap Moi intentó mantener las riendas del poder al situar como candidato sucesor a un político títere de la comunidad kikuyu, Uhuru Kenyatta (hijo de Jomo Kenyatta), pero una amplia coalición liderada por Kibaki, con el apoyo de Raila Odinga, consiguió la victoria con la promesa de una transformación política y democrática, de acabar con la corrupción y redistribuir la riqueza, en un país eminentemente pobre, agrícola y que basa su crecimiento en el turismo.

Sin embargo, el crecimiento económico experimentado durante estos cinco años no ha supuesto una mejora en las condiciones de vida de la mayoría de la población (con altas tasas de desempleo que alcanzan entre el 40 y el 50% de la población activa) y sí en cambio la de las élites económicas del país: las desigualdades sociales se han incrementado, y la corrupción ha alcanzado niveles similares a los de la época de Daniel Arap Moi, en haber se descubierto diversos escándalos financieros. Además, la situación de seguridad se ha deteriorado durante estos años en el país, y se ha puesto de manifiesto de tres formas diferentes: en primer lugar, se ha desencadenado una

oleada de criminalidad en las zonas urbanas. En segundo lugar, han proliferado disputas de carácter intercomunitario entre antiguos y nuevos pobladores por la propiedad y el uso de la tierra, principalmente en los distritos del Monte Elgon (donde han muerto en torno a 180 personas desde diciembre de 2006) y de Kisii, al suroeste, así como a los distritos de Samburu (norte) y Laikipia (centro), donde diversos enfrentamientos, consecuencia del saqueo de ganado, provocaron el desplazamiento de miles de personas y unas 50 víctimas mortales. Estas disputas a menudo son instigadas políticamente en periodo electoral, añadiéndose a la instrumentalización de las diferencias étnicas con objetivos políticos. En tercer lugar, se puso en marcha la operación policial contra la secta Mungiki, que ha causado la muerte de unas 120 personas entre mayo y noviembre del año 2007. En este sentido, un estudio realizado por una organización local denunció que la policía habría provocado la muerte de más de 8.000 personas como consecuencia de torturas y ejecuciones extrajudiciales contra personas sospechosas de pertenecer a esta secta. Esta represión vino acompañada de la desaparición de unas 4.000 personas desde el año 2002, cuando fue ilegalizada (la secta Mungiki apoyó al candidato Uhuru Kenyatta a las elecciones del año 2002), hasta agosto de 2007. Esta secta de raíces tradicionales, inspirada en la rebelión Mau Mau de los años cincuenta contra el imperio británico, actualmente engloba un mundo de criminalidad y dispone de una amplia red de extorsión a cambio de la protección de las rutas de los matatu (taxis colectivos) y conexiones en los diferentes ámbitos políticos del país.

En consecuencia, se ha ido configurando un clima de frustración que ha facilitado que Raila Odinga, de la etnia lúo, candidato del Movimiento Democrático Naranja (ODM, en inglés) capitalice todo este descontento, al concentrarse un conjunto de agravios y motivaciones. Étnicas, por la acaparación de élites de los kikuyus del poder en detrimento del resto. Políticas, por el incumplimiento de las promesas de cambio de Kibaki. Sociales, ya que el crimen y la violencia se encuentran fuera de control. Y finalmente, económicas, a causa de la distribución desigual del crecimiento de los últimos años que ha excluido a amplias capas de la población. Es así, con un discurso basado en el cambio y en la construcción de una sociedad más justa, que se ha conseguido este vuelco electoral. El cambio quedó patente en los resultados provisionales de las elecciones parlamentarias (que se celebraban en paralelo en las presidenciales) donde el ODM se llevó casi la mitad de los 210 escaños del Parlamento, mientras que el Partido de la Unidad Nacional (PNU) de Kibaki sólo consiguió una quinta parte de los escaños. Esta diferencia, previsiblemente, habría tenido que tener su reflejo en los resultados presidenciales, pero fueron manipulados en numerosos distritos en favor de Kibaki. Aparte de esta manipulación, un posible factor explicativo del voto favorable a Kibaki es que la gente que votó por otros representantes locales diferentes a los de Kibaki no lo hizo en contra de él en las elecciones presidenciales. Según diversos analistas, el voto ha ido dirigido preferentemente más en contra del *establishment* que en contra de los kikuyus, ya que muchos de los miembros del anterior gabinete no eran kikuyus, y diversos lúos miembros del PNU también perdieron sus escaños. La proliferación de partidos pequeños apoya esta hipótesis de voto en busca del cambio, cosa que puede explicar la respuesta explosiva ante el fraude electoral.

Esta conjunción de elementos ha contribuido a crear un cóctel de violencia en algunos casos política, es decir, alimentada por los partidos políticos y las pugnas por el poder; étnica, por la acumulación de agravios históricos; e indiscriminada y vinculada a la criminalidad y al descontrol de la situación reinante. Así, la violencia política tiene una base étnica y socioeconómica, ya que, aunque ni mucho menos todos los kikuyus eran beneficiarios del régimen existente, sí que es cierto que muchos beneficiarios del régimen eran kikuyus. Al numeroso balance de víctimas mortales y desplazamientos se añade, pues, una grave crisis humanitaria y alimenticia, el paro de las empresas y la caída en picado del sector turístico. Se estima que la crisis está provocando unas pérdidas de unos 30 millones de dólares al día. En más, la mayoría de ayuda humanitaria y fuel que llega a Uganda, Ruanda y el este de la RD Congo lo hace vía Mombasa, hecho que también está teniendo graves repercusiones en estos países.

La rápida intervención del premio Nobel sudafricano Desmond Tutu y del ex Secretario General de la ONU, Kofi Annan, entre los principales actores involucrados, ha conseguido conducir la situación hacia un principio de acuerdo. A pesar de todo, este preacuerdo, aunque previsible, llega demasiado tarde, y tampoco se sabe si será el definitivo. De esta cuestión tendrán que responder los líderes políticos, por no haberse comprometido a buscar una solución que evitara este derramamiento de sangre y la fractura social.

Josep M<sup>a</sup> Royo, investigador de la Escola de Cultura de Pau